

editorial

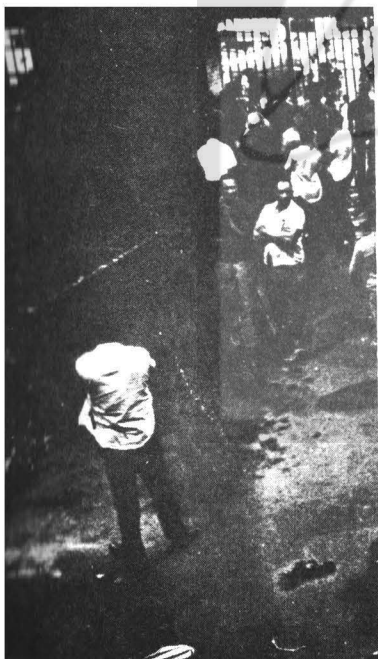
¿hay salida al problema nacional

Nuestro país se encuentra no sólo en una trágica situación, sino peor aún, en un callejón sin salida. Lo que aterra de la situación actual no es sólo la escalada de gravísimos conflictos, sino el ritmo de esa escalada sin solución previsible. El país está en un callejón cuyos márgenes son cada vez más angostos, y por ello los problemas son cada vez más densos. Se están radicalizando las diversas posiciones y grupos sociales y eso conduce a un enfrentamiento; lo cual tampoco es ninguna salida. En esta polarización de fuerzas los mejores talentos y las mejores voluntades de ambos bandos o están siendo eliminados, o silenciados, o están abandonando el país. Y en los momentos conflictivos y de emergencia es cuando más se necesita de esas personas. No se puede construir un país prescindiendo de los elementos más lúcidos y más valiosos. Es preciso detener este proceso loco y suicida, hacer una tregua, para ponerse a pensar, para buscar una salida, para ponerse a construir una nueva sociedad, si es que hay voluntad de hacerlo y de aceptar la dosis de sacrificio que exigirá de todos alguna renuncia de lo propio en beneficio de los demás. Hay sectores mayoritarios que no quieren verse involucrados en esta polarización y en esta situación, y que están pidiendo que se detenga este proceso.

Muchas veces hemos repetido desde estas páginas que la única salida es la reforma de las actuales estructuras injustas; lo mismo han repetido políticos de varios partidos, líderes religiosos, y el mismo señor Presidente de la República, cuando afirmó en su discurso inaugural que "conozco bien la situación de injusticia social en que viven muchos de nuestros hermanos, razón por la que estoy decidido a realizar, en mi período, los cambios políticos necesarios para alcanzar el bien común que debemos disfrutar los salvadoreños".

Hoy, sin embargo, no vamos a abundar en estas afirmaciones, sino a ofrecer y pedir medidas concretas para que el callejón tenga salida. Y para ello hay que volver a lo que ha originado el estrechamiento del callejón de nuestro país. Los poderes del Estado, que están únicamente constituidos para el servicio de todos los salvadoreños, se han puesto de hecho al servicio de una minoría; ésta ha marcado la dirección del callejón, y con sus exigencias lo ha ido angostando hasta límites insospechados.

Cuando se atisbaba un inicio de cambio estructural a través de la Transformación Agraria, y los poderes del Estado estaban decididos a realizarla, el poder y la presión de un grupo minoritario hizo abortar el proyecto. Su victoria no sólo supuso estabilizar la situación ya insostenible, sino también el optar por un grupo determinado contra el bien más uni-



versal, e hipotecar la independencia emergente del Estado frente a los grupos de poder. Cuando los conflictos se acrecentaron a mediados del pasado año, sobre todo en las zonas rurales y debido a los inaguantables límites de miseria, la minoría impone nuevamente su decisión, y consigue la promulgación de la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público. El tomar esa clara dirección en el callejón, lejos de mejorar o pacificar el país, indujo a la agudización de los conflictos sociales, cuyas consecuencias estamos ahora padeciendo.

El derecho constitucional de libre asociación, que se permite para las más diversas asociaciones empresariales, y se tolera con dificultad para los trabajadores industriales y urbanos, se deniega de hecho para la gran mayoría de la población nacional que vive y trabaja en el campo. Mientras que la única organización legalizada en el campo, debido a su carácter monopolístico y vertical, no puede responder a las diversas tendencias, necesidades y aspiraciones de los campesinos, ni los representa democráticamente, cualquier otra organización espontánea que surja de ellos es repudiada, anatematizada y enfrentada —hoy incluso violentamente— en vez de ser aceptada y reconocida como expresión válida de una realidad. Lejos de respetar una pluralidad y una autonomía que lleven a un diálogo y a una colaboración en la solución de los problemas que afectan al campo, los campesinos han caído en la trampa de considerarse enemigos entre ellos y de enfrentarse entre sí, en vez de tratar de construir juntos una sociedad más justa.

La dirección que la minoría ha impuesto a la gestión del Gobierno, por tanto, es no sólo éticamente incorrecta, sino políticamente ineficaz. Los problemas no han desaparecido, sino que han aumentado; los conflictos no han amainado, sino que se han agudizado hasta límites insospechados y desconocidos en la historia moderna del país. De seguir en esta dirección, la única alternativa que se presenta es la represión y la guerra. Pero nadie que sea sensato, que sea honesto, puede estar de acuerdo con la represión, con la guerra, ni puede estar tan cegado que crea que esa es una solución.

Avanzar por este callejón sin salida es un suicidio nacional. Suicidio para el pueblo que, sin otra alternativa pacífica y democrática para exigir sus derechos y exponer sus necesidades urgentes, irá siendo eliminado progresivamente. Suicidio para los poderes del Estado, que al enfrentarse al pueblo —último otorgador de sus poderes—, y al invertir la misión para el que ha sido creado, irá perdiendo cada vez más su moral, su justificación, y se irá desmoronando. Y suicidio también para aquéllos que obligaron a entrar en este callejón sin salida, pues acorralados por las necesidades perentorias de las mayorías, y por la presión social hacia su satisfacción, irán abandonando el país, o permanecerán en él exigiendo medidas aún más drásticas que pueden llevar a una verdadera lucha fratricida.

El primer paso para salir de ese callejón consiste, entonces, en desandar lo mal andado, en convencerse de que con el tipo de medidas indicadas ni se soluciona nada ni se crea el clima en que una posible solución pueda ser pensada y llevada a cabo. Hay que detenerse, pues, en ese avanzar sin horizonte. Hay que regresar. Hay que rectificar. Y esta decisión política requiere clarividencia y valentía.



En el número anterior de la revista proponíamos un primer paso: la **Amnistía**. Es preciso volver a empezar. Es preciso olvidar el pasado. Es preciso crear un clima de respeto y confianza. Una amnistía generosa y amplia que garantice un mínimo de convivencia y seguridad, para hacer posible la democracia, para recuperar a todos los que quieran trabajar dentro de la legalidad en la construcción de esa salida. No podemos prescindir de los mejores talentos, de los mejores dirigentes, de los mejores organizadores, de los que verdaderamente quieren construir una patria más justa y más digna.

Existe también un grave obstáculo que genera una radical desconfianza: la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público. No se puede calificar, gratuitamente, como enemigos de la patria a quienes tengan otro modo de concebir la sociedad y que luchen por esa idea. No se les puede atribuir, con simpleza, que tengan mala voluntad o que sean antipatriotas. Con esas medidas se los está obligando a refugiarse en la clandestinidad o en opciones radicales que sí son peligrosas para la sociedad. Es preciso aprovechar el aporte, la visión, la voluntad de esas personas que quieren una patria mejor, más noble, más humana. La Ley tiene que ser abolida para que todos puedan entrar en la legalidad, en el diálogo, en el verdadero sentido de la democracia, en el respeto efectivo de los distintos pensamientos y opciones, en el esfuerzo conjunto de construcción de la patria nueva.

Eso no es más que la salida del callejón, pero es el primer paso, imprescindible. Queda la gran tarea de pensar, de imaginar, de crear, entre todos. Hay que abordar los graves problemas estructurales del país. Hay que optar definitivamente por todo el país, y no por una minoría. Y los poderes del Estado se tienen que poner incondicionalmente al servicio de esa tarea, así también los distintos grupos sociales. Es tarea difícil, dura, pero propia de un pueblo generoso y de dirigentes con visión y voluntad. Habrá muchos obstáculos que vencer, y tal vez el esfuerzo mayor será el crear una verdadera conciencia nacional, el convencer a todos de que deben renunciar a sus intereses egoístas en beneficio de la colectividad, en crear las condiciones básicas para una coexistencia y un entendimiento constructivo entre clases. Sólo así será posible sentarse juntos a encontrar y construir una verdadera salida para el país.

